

Proceso: Acción de Tutela
Accionante: Sebastián Jiménez Orozco
Accionadas: La Equidad Seguros de Vida O.C.
Radicado: 660014003007-2025-00606-00



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL

Pereira – Risaralda, veintiséis de mayo de dos mil veinticinco

1. OBJETO

Resuelve¹ el Despacho en primera instancia la acción de tutela instaurada por Sebastián Jiménez Orozco en contra de La Equidad Seguros de Vida O.C.

2. ANTECEDENTES

2.1. Pretensión de amparo

El accionante reclama el amparo de sus derechos fundamentales *a la petición y al debido proceso*.

Como medida de protección solicita que se ordene a la entidad que conforma el extremo pasivo de esta acción que *dé respuesta de fondo a la solicitud que radicó ante ella el 21 de abril de 2025*.

2.2. Fundamentos fácticos relevantes

El accionante radicó en debida forma, en la forma aludida, la petición antedicha cuya respuesta pretende mediante esta acción por cuanto, a la fecha de su interposición, no se había emitido una contestación que pueda predicarse que es de fondo por parte de la entidad accionada.

En consecuencia, presentó esta acción constitucional para obtener el amparo de sus derechos fundamentales, aportando como fundamento relevante de su solicitud el escrito petitorio con la constancia de su radicación vía correo electrónico.

2.3. Trámite impartido

Por auto notificado el 15 de mayo del año que avanza el Juzgado admitió la tutela y corrió el traslado legal por 2 días (16 y 19 de mayo).

2.4. Réplica relevante

La Equidad Seguros de Vida O.C. guardó silencio pese a haber sido adecuadamente notificada vía correo electrónico el 15 de mayo de 2025 a la dirección notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop que registra autorizada para tal efecto en su certificado de existencia y representación legal.

¹ De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, y en el Código General del Proceso en todo aquello que no contraría dicha normatividad.

3. ESTUDIO PREVIO DE PROCEDENCIA Y SENTIDO DEL FALLO

El Despacho encuentra que **se superan** los presupuestos de procedencia definidos por la Corte Constitucional², a saber: (i) legitimación por activa, (ii) legitimación por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad.

Sin embargo, no se encuentra que el accionante sea un sujeto de especial protección constitucional.

A la luz de lo anterior, se realizarán las consideraciones jurídicas pertinentes a fin de emitir un fallo sobre el caso en concreto en lo que respecta a su derecho a la salud, el cual decidirá, de manera sintética, **la concesión de plano del amparo deprecado**, pero en los términos que serán explicados.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 y por la sección respectiva del Decreto 1069 de 2015, constituye un mecanismo *preferente y sumario* de protección de derechos constitucionales cuando quiera que los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular en ciertos casos legalmente señalados, en un contexto de informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, siempre y cuando se demuestre legitimación, inmediatez y subsidiariedad.

“La Constitución Política en su artículo 86 creó la acción de tutela como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales para dotar a las personas de un mecanismo expedito que posee las siguientes características: *Subsidiario*, porque sólo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo. *Inmediato*, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar. *Sencillo*, porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio. *Específico*, porque se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales y por último, es *Eficaz*, porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien para conceder o bien para negar lo solicitado. Estas condiciones se concretan en la definición de un trámite preferente y sumario”.³

4.2. El derecho fundamental de petición

Uno de los derechos que puede ser objeto de protección mediante la acción de tutela es el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política.⁴

Respecto del núcleo esencial de este derecho, la Corte Constitucional precisó que se encuentra integrado por 4 elementos fundamentales, a saber: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución; iii) la respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión.⁵

² Sentencia T-237 de 2023, Diana Fajardo Rivera, Magistrada Ponente, Corte Constitucional.

³ Auto 053 de 2002, Dr. Jaime Córdoba Triviño, Magistrado Ponente, Corte Constitucional.

⁴ “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas”.

⁵ Sentencia C-951 de 2014, Dra. Martha Victoria Sánchez Méndez, Magistrada Ponente, Corte Constitucional.

Estos elementos, de modo sintético, son definidos así:

“La formulación de la petición se refiere a que tanto las autoridades, las organizaciones como las instituciones privadas deben recibir y tramitar todas las solicitudes respetuosas presentadas por las personas naturales o jurídicas, ya sean escritas o verbales. En cuanto a la pronta resolución, consiste en que las peticiones sean resueltas dentro de los términos legales, que, por regla general, es de 15 días hábiles luego de su presentación. Respecto de la respuesta de fondo, exige que esta sea clara, precisa, congruente y consecuente en relación con cada aspecto planteado. Esto último sin importar que la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado. En la relación a la notificación, esta garantiza el derecho a conocer la respuesta, así como la posibilidad de impugnarla y controvertirla.

[...]

En síntesis, el derecho de petición es una garantía que protege las solicitudes respetuosas presentadas por las personas naturales o jurídicas. Este derecho se vulnera cuando (i) no se obtiene una respuesta según los términos legales, (ii) no hay una respuesta de fondo o (iii) no se notifica”.⁶

Por lo tanto, este derecho fundamental sólo se entiende satisfecho cuando los 4 elementos aludidos son respetados y protegidos.

4.3. Los términos de respuesta y la pronta resolución

Como se ha dicho, la pronta resolución a la petición presentada es parte del núcleo esencial de este derecho. Sin embargo, el término al que se hace referencia con la palabra ‘pronto’ no es de interpretación privada y subjetiva del peticionario o de la entidad ante la que se le radica la solicitud, en tanto el ordenamiento jurídico ya reglamenta este límite temporal en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la sustitución hecha por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, cuyo tenor literal reza:

“ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones.

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

⁶ Sentencia T-067 de 2024, Dra. Christina Pardo Schlesinger, Magistrada Ponente, Corte Constitucional.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.

Sin embargo, estos términos, como bien se extrae del artículo transcrito, no son camisa de fuerza en caso de existir una norma especial que establezca un plazo diferente. Por lo que los tiempos de emisión de respuesta anotados en el artículo anterior no pueden aplicarse a asuntos para los cuales se ha fijado un término especial para el caso en concreto.

4.4. La diferencia entre el derecho de petición y del derecho a lo pedido

Vale la pena recordar la consabida línea de pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha establecido respecto de la diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, puesto que es un error relativamente común confundir ambas figuras.

La protección que procede del artículo 23 de la Constitución Política, como anteriormente se ha resumido, es al derecho fundamental de petición que, en una profunda síntesis, se satisface cuando en el término legal se emite y notifica al peticionario una respuesta que resuelve cada una de las solicitudes presentadas, sin necesidad de que se acceda a lo que ha sido pedido, es decir, el deber que se desprende del derecho de petición es *responder*, más no *conceder*; responder adecuadamente, claro está, pero no entendiendo tal respuesta como la obligación de que lo pedido sea concedido.

Por lo tanto, el derecho a lo pedido es la concesión de aquello que ha sido solicitado, es decir, se supera el deber de la respuesta para darle paso al deber de que esta sea positiva y favorable a quien ha elevado la petición. Este ‘derecho’, si bien se ha dado a conocer con ese rótulo, no se encuentra protegido por el artículo aludido y no es, propiamente, un derecho y menos el de petición, en tanto su núcleo no implica, como se ha dicho, la *respuesta favorable*, sino la *respuesta suficiente*, esto es, de fondo: clara, precisa, congruente y consecuente.

“Se ha destacado además que la satisfacción del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Bajo esa condición, se ha diferenciado el derecho de petición del “*derecho a lo pedido*”, que se emplea con el fin de destacar que “*el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal*”.⁷

Lo anterior no transgrede que existan peticiones que sólo se entienden contestadas adecuadamente cuando, por ejemplo, se solicita la entrega de la documentación pedida, la cual debe ser suministrada si no obra reserva legal que lo imposibilite. En tales eventos, se amalgama el derecho de petición con el derecho a lo pedido que usualmente no tiene aplicación por no ser parte del núcleo esencial de aquel, deviniendo lógico que la solicitud no se entienda satisfecha a menos que lo pedido sea provisto en caso de que no existan argumentos legales válidos para negarlo.

⁷ Sentencia T-424 de 2019, Dr. José Fernando Reyes Cuartas, Magistrado Sustanciador, Corte Constitucional.

4.5. El fallo de plano

Si bien la acción de tutela posee un carácter innegablemente informal, esto no justifica ni promueve que el accionante no deba demostrar al menos sumariamente lo pretendido, en tanto la sede constitucional, aún en su particular especialidad, no deja de ser una sede judicial que depende de las pruebas puestas en el conocimiento del juez para que emita decisiones con base en ellas.

Sin embargo, este deber no solamente recae sobre el accionante, sino también sobre la parte accionada como presunta amenazadora o vulneradora del derecho invocado. Por lo tanto, en el evento de que guarde silencio dentro del término concedido en el auto que admite la acción de tutela o realiza el requerimiento correspondiente, el Decreto 2591 de 1991 establece como *sanción* para el silente, en beneficio del accionante, el tener por ciertos los hechos informados, pudiéndose en consecuencia resolver de plano el asunto puesto en conocimiento del Despacho. Lo anterior significa que debe tomar una decisión de fondo sin el usual análisis probatorio que caracteriza este proceso asumiendo como verdadero aquello que la parte accionante relató:

“ARTICULO (sic) 20. PRESUNCION (sic) DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

En todo caso, el deber de rendir el informe solicitado no se cumple meramente cuando se allega un escrito contentivo de alguna respuesta, sino cuando lo que se manifiesta logra dar luz concreta al proceso al abordar las cuestiones discutidas en él, es decir, cuando afronta específicamente el asunto discutido.

Por lo tanto, si el informe resulta insustancial porque carece de la especificidad que debería poseer una respuesta dentro de un proceso judicial, también debe concluirse que *hubo silencio, que el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente*, y entonces resulta posible aplicar las mismas consecuencias relativas al evento en que no se radica escrito alguno. Sólo puede considerarse como *silencio* aquello que no contribuye al esclarecimiento del caso y a su resolución, y así “La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad”⁸.

Por último, deviene menester manifestar que esta regla no implica que todo aquello que sea solicitado por el accionante debe ser concedido cuando hay silencio de parte de quien es accionado, en tanto el juez debe fundar su decisión en medios probatorios⁹. Ciertamente “en cualquier medio probatorio”¹⁰, pero en pruebas al fin y al cabo. Por lo que, si bien se tendrán *por ciertos los hechos*, no necesariamente como *válidas las pretensiones* que, al menos sumariamente, deben fundamentarse en material que permita al juez constitucional adquirir un “convencimiento respecto de la situación litigiosa”¹¹ para “para conceder o negar la tutela”, en un contexto que se ciña al ordenamiento jurídico vigente.

⁸ Artículo 19, Decreto 2591 de 1991.

⁹ Artículo 18, *Ibidem*.

¹⁰ Artículo 21, *Ibidem*.

¹¹ “El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas” (Artículo 22, *Ibidem*).

5. CASO CONCRETO

5.1. Problema jurídico

El problema jurídico que a modo de interrogante se desprende de la situación expuesta puede plantearse de la siguiente manera:

¿La Equidad Seguros de Vida O.C. vulneró el derecho de petición del accionante a la luz de su respuesta a la solicitud que por él les fue enviada el 21 de abril de 2025?

5.2. Análisis

Para este Juzgado es evidente que existe un compromiso *del derecho fundamental de petición* del accionante.

Por lo tanto, como se argumentó en las consideraciones, se concederá *de plano* el amparo deprecado con base en las siguientes 3 razones:

- i) La entidad accionada guardó silencio durante el término de traslado concedido y hasta el momento de emisión de este fallo, y esa será la entidad obligada a través de la presente sentencia.
- ii) Esta falladora no estima necesaria otra averiguación que ilumine su entendimiento en tanto se comprobó que el 21 de abril de 2025 la petición fue radicada ante la entidad accionada vía correo electrónico con destino a la dirección servicio.cliente@laequidadseguros.coop, quedando asignada con el número de trámite 0000108558.

Tal petición tenía como fin obtener documentación y constancias de pólizas expedidas por la entidad.

Por no existir término especial para la resolución de esa petición en particular contemplado en la normatividad que regula las actuaciones desplegadas ante esa aseguradora, le resultaba aplicable el término general de 15 días hábiles para notificar una respuesta que abordara el asunto pedido, según lo contemplado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la sustitución proveniente del artículo 1 de la Ley 1755 de 2013.

Tales días se cumplieron el 13 de mayo de 2025, al descartar sábados, domingos y festivos. Sin embargo, para tal fecha no se había emitido una respuesta que cumpliera con los requisitos legales y constitucionales, y hasta ahora no se ha demostrado un proceder diferente.

En vista de ello, la parte accionante presentó esta acción constitucional el 14 de mayo de 2025.

El compromiso aludido tiene por fuente, entonces, *la demora* en la notificación de una respuesta suficiente.

A la luz de todo lo anterior, es posible afirmar que los elementos que integran el derecho de petición se encuentran suplidos *parcialmente*:

(i) la petición fue debidamente formulada; (ii) el término legal para responderla se ha superado; (iii) todavía no hay respuesta emitida que aborde de un modo suficiente lo pedido; (iv) por lo tanto, no se ha notificado a la parte accionante.

En consecuencia, este fallo arrojará la notificación de una respuesta de fondo a la solicitud del actor. Dado que esto no ha sucedido hasta ahora, como se ha dicho, se vulneró el derecho que en esta acción es protagonista.

Los anteriores 2 puntos se desprenden de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:

“PRESUNCION (sic) DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

Como análisis final de este punto, téngase presente que el receptor de la petición no tiene la obligación de acceder a lo solicitado ni este Despacho el deber de verificar u ordenar que la respuesta en particular sea del agrado de quien la pretende. Y esto es así, por cuanto el juez constitucional vela por la protección del derecho fundamental de petición (en este caso), no estando dentro de los elementos que constituyen su núcleo esencial la entrega de una contestación que resulte positiva para la peticionaria que, aquí, resulta ser tutelante.

Sin embargo, tratándose de la solicitud de documentos, el derecho de petición se amalgama con el derecho a lo pedido que usualmente no tiene aplicación por no ser parte del núcleo esencial de aquel. Y deviene lógico, en tanto una petición de documentos no se puede entender suplida a menos que los documentos solicitados sean entregados. La salvedad a esto es que tal documentación se encuentre protegida por alguna reserva legal que, en todo caso, debe argumentarse en el plazo de respuesta.

En este punto, resulta menester precisar que, aunque otros derechos puedan verse inmersos y afectados, el protagonista en esta acción es a todas luces el que protege que se notifiquen puntualmente respuestas de fondo a las solicitudes respetuosas debidamente radicadas. Por tal razón se estableció que el compromiso se produjo sobre el derecho de petición y no sobre el otro derecho incoado. En todo caso, su protección genera solución a la solicitud pretendida mediante esta acción.

5.3. Conclusión

Es posible concluir que el proceder de La Equidad Seguros de Vida O.C. compromete el derecho de petición del accionante por cuanto, pese al tiempo transcurrido, no ha garantizado la emisión y notificación de una respuesta a la solicitud que en debida forma fue radicada.

A la luz de lo anterior, el único camino que resulta protector del derecho vulnerado es ordenar a la aseguradora accionada que emita una respuesta de fondo a la petición radicada el 21 de abril de 2025, y que la notifique haciendo uso de alguno de los medios provistos por el accionante para tal efecto.

Se tutelar , entonces, el derecho de petici n del accionante en los t rminos enunciados.

DECISI N

Con base en lo expuesto, el Juzgado S ptimo Civil Municipal de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep blica y por mandato de la Constituci n y la Ley

RESUELVE

PRIMERO. TUTELAR *el derecho fundamental de petici n* de Sebasti n Jim nez Orozco (C.C. 1.088.257.851)

SEGUNDO. ORDENAR a **La Equidad Seguros de Vida O.C.** (N.I.T. 830.008.686-1) que *en el t rmino perentorio de las 48 horas siguientes a la notificaci n de este fallo* emita una respuesta suficiente a la petici n radicada por Sebasti n Jim nez Orozco (C.C. 1.088.257.851) el 21 de abril de 2025, y que la notifique haciendo uso de alguno de los medios provistos por el accionante para tal efecto.

TERCERO. NOTIFICAR inmediatamente el contenido de este fallo a las partes v a correo electr nico, seg n lo previsto en los art culos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015, advirtiendo que podr  ser impugnado dentro de los 3 d as h biles siguientes a su notificaci n, sin perjuicio de su cumplimiento.

Seg n lo establecido en el p rrafo 1 del art culo 8 de la Ley 2213 de 2022, y a la luz de la sentencia SU-387 de 2022 de la Corte Constitucional, el t rmino para impugnar empezar  a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, una vez transcurridos 2 d as h biles siguientes al env o de esta providencia.

CUARTO. REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisi n en caso de que este fallo no sea impugnado dentro del t rmino legal, en virtud de lo establecido en el art culo 31 del Decreto 2591 de 1991. En el otro evento, remitir a la Oficina Judicial para su correspondiente reparto entre los Jueces Civiles del Circuito de esta localidad de conformidad con el art culo 32 *ibidem*.

Notif quese y c mplase.

SANDRA JOHANNA ESCOBAR G MEZ
JUEZ

ACB

Firmado Por:
Sandra Johanna Escobar Gomez
Juez

Juzgado Municipal

Civil 007

Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c4e4b4844e246e7075760250cca816ceb96da1868314595126e5601771637e11**

Documento generado en 27/05/2025 07:36:39 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>